



Medellín, veintisiete (27) de octubre dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FREDY MANTILLA RUIZ
DEMANDADOS: PRODUCTOS FAMILIA S.A.
PROCEDENCIA: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO: 05001 31 05 015 2020 00164 01

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso de apelación, interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad demandada, contra el auto del 18 de agosto de 2022, dictado por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se declaró no probada la excepción previa de **Cosa Juzgada** propuesta dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor **FREDY MANTILLA RUIZ** en contra de la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** (en adelante FAMILIA S.A.)

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

La parte actora formuló demanda ordinaria laboral el 07 de julio de 2020 contra la sociedad FAMILIA S.A., a través de la cual pretende que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido que terminó el 20 de abril de 2017, fecha en la cual se presentó un despido sin justa causa, engañando al trabajador y haciendo ver dicho despido como una terminación de mutuo acuerdo, y que como consecuencia de ello se condene a la demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa en los términos establecidos en el artículo 64 del CST.

La sociedad FAMILIA S.A., dio respuesta a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y formuló varias excepciones, entre ellas la excepción previa de

“**Cosa Juzgada**”, argumentando en síntesis que la finalización del vínculo laboral del demandante fue consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido del literal b), del numeral 1º, del artículo 61 del CST, norma subrogada por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990.

Expuso además que el artículo 2483 del Código Civil señala que la transacción produce el efecto de cosa juzgada y que dicha figura resulta aplicable al derecho laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del CST, norma que le otorga plena validez a la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles, lo cual confirma la legalidad y validez del acuerdo transaccional suscrito entre PRODUCTOS FAMILIA S.A. y el demandante el día 20 de abril de 2017, en el que se transigió de forma definitiva cualquier tipo de litigio o controversia que se pudiera generar como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, lo que permite concluir que lo pretendido por el señor Fredy Mantilla Ruiz en el presente 26 litigio ya fue transigido por las partes, por lo que está probada la excepción de cosa juzgada.

Indica que en la transacción firmada el día 20 de abril de 2017, el demandante y la sociedad demandada acordaron lo siguiente:

*“(...) En virtud de la suma transaccional que se otorga al TRABAJADOR(A), las partes han decidido **TRANSIGIR de forma expresa y definitiva** cualquier eventual reclamación o litigio sobre cualquier tipo de acreencias laborales que pudieran derivarse del contrato de trabajo que vinculó a las partes, **especialmente transigir cualquier eventual reclamación o diferencia sobre las causas o motivos que dieron origen a la terminación del vínculo laboral** y eventuales reclamaciones relacionadas con indemnizaciones y/o bonificaciones por retiro, y/o acciones de reintegro de índole constitucional o legal (...)”* (Subrayado fuera de texto).

Conforme lo anterior, concluye que, lo pretendido en el presente proceso judicial ya fue transigido por las partes en el acuerdo al que se ha hecho referencia, razón por la cual, resulta aplicable la institución de la cosa juzgada, no siendo posible que el Juez se pronuncie sobre una temática que ya fue transigida por las partes, en este caso, en la transacción firmada el día 20 de abril de 2017.

2. DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA

La oficina judicial de primera instancia, en el trámite del proceso y en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la etapa de decisión de excepciones, llevada a

cabo el día 18 de agosto de 2022, al resolver sobre la excepción previa de **Cosa Juzgada** propuesta por FAMILIA S.A., la declaró NO probada, luego de concluir que lo manifestado por la parte actora enerva cualquier estructuración de cosa juzgada ya que no desconoce en sí la existencia del acuerdo celebrado con la empresa, mediante el cual dieron por terminado el contrato de trabajo, sino que pretende dejarlo sin efecto alegando haber sido engañado y no ser consciente de las repercusiones que ello le podía causar a futuro.

Señaló además la *a quo*, que no puede perderse de vista que los derechos laborales, una vez adquiridos, tienen la naturaleza de irrenunciables y no pueden ser desconocidos, e incluso actuaciones tan excepcionales como conciliaciones realizadas ante autoridades del Estado, o yendo aún más lejos, ante autoridades judiciales, podrían ser susceptibles de ser anuladas si se evidencia el desconocimiento de derechos laborales causados, que por ese mero hecho se convierten en derechos ciertos e indiscutibles, sin que puedan ser materia de transacción o de conciliación, y si eso puede suceder con acuerdos celebrados ante autoridades, tanto más si se trata de un mero cuerpo privado celebrado entre el empleador y el trabajador en el que no hubo ninguna supervisión o aprobación por cuenta de una autoridad administrativa o refrendado por autoridad judicial, y por lo tanto, no resulta entonces admisible que en esta etapa primigenia del proceso se declarase la existencia de una cosa juzgada teniendo como base un acuerdo de terminación del contrato que en su forma fue de mutuo acuerdo pero que la misma parte indica que se hizo bajo engaños, lo que obliga a la judicatura a practicar todas las pruebas a las que haya lugar y hacer al análisis de rigor sobre la validez o no de dicho acuerdo transaccional en la sentencia y no anticipadamente.

Por todo lo anterior, consideró la *a quo*, que la excepción de cosa Juzgada resulta impróspera y condenó en costas a la sociedad demandada por haberse resuelto de manera desfavorable dicha excepción previa.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la demandada, inconforme con la anterior decisión, la apeló, argumentando que entre las partes se suscribió inicialmente un contrato de trabajo a término indefinido que inició el 05 de septiembre de 2005 y que finalizó el 20 de abril de 2017 por mutuo consentimiento entre las partes, de conformidad con el literal b), del numeral 1º, del artículo 61 del CST, norma subrogada por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990.

Indica que como se ha reiterado durante todo el proceso, entre las partes se suscribió un acuerdo transaccional de mutuo acuerdo para la terminación del contrato de trabajo del demandante y como se encuentra acreditado, durante la vigencia del contrato, la empresa canceló la totalidad de las acreencias laborales que se había causado en favor del demandante y por tanto como se puede observar en el documento de transacción, esta se realizó sobre derechos inciertos y discutibles, razón por la cual goza de plena validez y por ello el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada como se encuentra debidamente establecido en el artículo 15 del CST y el artículo 2482 del Código Civil.

Señala que el demandante, producto del acuerdo transaccional, recibió por parte de la empresa una suma de \$65.649.001, suma que estaba conformada por varios conceptos que quedaron discriminados en el acuerdo de transacción y que fue recibida por el actor sin ninguna clase de objeción, de manera libre y voluntaria y en pleno uso de sus facultades como lo indica el documento, suscribiendo el citado acuerdo, así como la liquidación final de acreencias laborales, lo cual demuestra el conocimiento que tenía el demandante, tanto del acuerdo como de los beneficios que se le otorgaron, refutándose así su legalidad y validez.

Indica que cuando se manifiesta que el documento hace tránsito a cosa juzgada lo que se esta es asegurando que el hoy demandante no adelante contra la empresa FAMILIA S.A. una acción judicial posterior con el fin de revivir asuntos que ya han sido conciliados, porque de hacerse ello, el Juez debe declarar probada, aun de oficio, la excepción de cosa juzgada, debido a que la transacción tiene la misma fuerza obligante de una sentencia y deviene automáticamente en una transacción que no requiere para su validez la intervención de un tercero.

Señala que la connotación de la transacción no requiere el aval de autoridad competente, de ahí que sea suficiente la manifestación de voluntad allí plasmada, de forma consciente y libre de apremio, y que por supuesto no vulnere derechos ciertos e indiscutibles, como ocurre en este caso, ello conforme la Jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia que ha reconocido la validez y legalidad de la transacción e incluso la viabilidad del acuerdo de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, mediante este tipo de documentos.

Finalmente reitera que la transacción en este caso versó sobre derechos inciertos y discutibles, y en particular sobre el desarrollo de la terminación de la relación laboral, por lo cual no resultan desbordados los límites legales propios de esta figura en el

presente caso, pues no hay presencia de ningún vicio del consentimiento por parte de alguna de las partes, ni se han vulnerado derechos al demandante, por lo que solicita terminar el presente proceso, teniendo en cuenta que existe cosa juzgada que precavió un litigio eventual entre las partes que fue transigido.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales del DEMANDANTE y de la demandada FAMILIA S.A., allegaron escritos de alegaciones, en los cuales señalaron resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

1. En la sentencia de primera instancia el A Quo, no concedió lo pretendido de la parte actora argumentando que la transacción cumple con los requisitos de validez, que emana de la ley y que por tal motivo no debía discutirse si este se encontraba o no viciado.
2. Mi mandante, tal y como se manifestó en la diligencia de audiencia de primera instancia, fue inducida a un error, entiéndase este como vicio en el consentimiento conforme a 1508 del código civil, ahora el 1513 del mismo estatuto legislativo nos informa que la fuerza siendo este el caso específico que mi representada se ve inmersa, no viciaría el consentimiento, pero este género una impresión tanto así que el temor a no tener más trabajo y más aún salir con menor dinero tomo la opción que en su momento considero más favorable, Se reitera como reparo a la sentencia que se vulnero el derecho a la información y a consultar o asesorarse de mi prohijada, pues la oferta que le presentaron no tuvo opción de consultarla con nadie más.
3. De manera engañosa la llevaron a una reunión, la cual consideraban que sería una capacitación como la empresa lo hacía periódicamente y fue entonces la manifestación masiva y en publica de un proyecto de restructuración de la empresa, y de manera individual sin oportunidad de consultar común experto en derecho o aclarar términos, se les coacciono a firmar el contrato de transacción, utilizando temerariamente la figura de dos liquidaciones con cifras muy diferentes la una de la otra la cual para poder tomar la de mayor valor, era una imposición firmar la transacción laboral.

4. Los efectos de estas figuras, son claros a la legislación laboral La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. **No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa**, y es esta negrilla aparte de texto la que se le pretende dar validez, pues a primera lectura de la acción se debe tener claro que la transacción está completamente aprobada sin vicio ni error alguno, toca examinar a fondo y se le solicito por eso a través de la prueba testimonial que se le diera a entender al fallador que lo realizado por la compañía demandada es un acto de deshumanización de las relaciones laborales, engañándose, aprovechándose de la figura de trabajador y el desconocimiento de algunas acciones o términos lo cual para cualquier ser humano en un estado de choque optaría por la cifra monetaria más alta, sin saber a lo que realmente renunciaba.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El **principio de favorabilidad** consiste en que al contribuyente o ciudadano se les aplica la ley más favorable a sus intereses, o la menos restrictiva. Esto sucede cuando la ley que regula un aspecto específico cambia, y la nueva ley resulta más favorable para el contribuyente o ciudadano.

El **principio de favorabilidad** en materia **laboral**, consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas.

Frente al alcance de este precepto constitucional en materia de interpretación de normas convencionales, la Sentencia SU-1185 del 2001 expuso que ante las posibles dudas que pueden surgir sobre el sentido y alcance de una norma convencional, y frente a las diversas interpretaciones que de la misma se formulen, es deber del juez priorizar aquella que interprete en mejor medida los derechos laborales.

Esta postura se consolidó en la providencia SU-241 del 2015, la cual estableció que **si a juicio del fallador (lo que incluye convenciones colectivas) la norma presenta dos interpretaciones posibles el fallador debe inclinarse por la más favorable al trabajador, en aplicación de este principio.**

Así las cosas, también reiteró, citando la Sentencia T-350 del 2012, que a pesar del amplio margen de interpretación que tienen las autoridades judiciales estas no pueden,

ante las diversas interpretaciones que puedan surgir de la norma, elegir aquella que desfavorece al trabajador, pues se configura un defecto que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social por desconocimiento directo de la Constitución.

Cabe precisar que no cualquier entendimiento del juez puede entenderse compatible con el ordenamiento jurídico en sentido amplio, puesto que el sistema jurídico tiene niveles de restricciones a dicha autonomía judicial, entre ellas la realización de derechos, principios y deber superiores **Corte Constitucional, Sentencia, SU-027, 05/02/2021.**

Por lo antes expuesto solicito señor magistrado, se revoque la decisión tomada por el juez de primera instancia y en su lugar reconozca el derecho amparado a mi prohijada, en la acción petitoria.”

ALEGATOS DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.

En primer lugar, dentro del presente proceso, obra un documento que fue aportado como prueba con la contestación de la demanda, denomino “Acuerdo transaccional de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento”, acuerdo que fue suscrito de forma libre y voluntaria por el demandante el día 20 de abril de 2017.

En este documento, se evidencia lo siguiente

- a. Que la terminación del contrato de trabajo entre PRODUCTOS FAMILIA S.A. y el señor FREDY MANTILLA RUIZ, fue de mutuo acuerdo y que dejaría sin efectos la relación laboral a partir el 20 de abril de 2017.
- b. Que PRODUCTOS FAMILIA S.A., cumplió a cabalidad con sus obligaciones durante la vigencia de la relación laboral, esto es, pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema integral de seguridad social, y demás emolumentos de índole legal.
- c. Que se transigió con el objeto de evitar futuros litigios, el pago de **SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL UN PESOS *MONEDA CORRIENTE (\$65.649.001)***, a favor del FREDY MANTILLA RUIZ, dinero que fue recibido a satisfacción y sin objeción alguna por el demandante a la fecha de suscripción del acuerdo.

Ahora bien, respecto a la validez de la transacción como mecanismo de terminación del contrato, me permito reiterar lo que señala la ley y la jurisprudencia respecto a la transacción en materia laboral, argumentos que fueron expuestos de manera más precisa en la contestación de la demanda.

En los artículos 2469 y 2483 del Código civil, se señala que la transacción es un contrato que precave un litigio eventual y que su efecto es el de Cosa Juzgada. Esta norma, es aplicable en derecho laboral en según el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, solo que aquí se limita su uso a los derechos ciertos e indiscutibles, sin embargo, se puede evidenciar en el caso concreto que la transacción celebrada entre las partes goza de plena validez de conformidad con este artículo, ya que como se expresó, la demandada cumplió la totalidad de sus obligaciones legales durante la existencia de la relación laboral y que la transacción versó sobre derechos de los que el demandado podía disponer libremente, sin limitación legal alguna.

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en reiteradas oportunidades ha reconocido la validez de la transacción para temas laborales y el efecto de Cosa Juzgada, nuevamente, siempre y cuando no se realice sobre derechos ciertos e indiscutibles, esto en consonancia con el artículo 53 de la Constitución Política. Además, ha señalado que no puede desconocerse el efecto de Cosa Juzgada por parte de los administradores de justicia, e imponer una condena emanada de una transacción cuya validez no ha sido objetada por el accionante tal y como es el caso en este proceso.¹

Sin embargo, manifiesta el demandante que existió temeridad y engaño por parte de la demandada al terminar el contrato, ya que no medió mutuo consentimiento por las partes a la hora de la suscripción de la transacción, al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia con radicación No. 57901 del 14 de diciembre de 2017, Magistrada Ponente Jimena Isabel Godoy Fajardo, ha precisado que:

*“(...) Ahora bien, revisado el texto del acta de transacción suscrita entre las partes el 31 de enero de 2007 (f. 8 y 9 cuaderno del juzgado), **aparece claro que las mismas convinieron libremente y de mutuo acuerdo la terminación del contrato de trabajo que las vincula** y, como consecuencia de ello el*

¹ Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, Acta No. 25, radicación No. 56617 del 13 de julio de 2016 – Magistrado Ponente: Jorge Luí Quiróz Alemán.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, Sentencia con radicación No. 53793 del 1º de marzo de 2017 – Magistrado Ponente: Jorge Mauricio Burgos Ruíz.

empleador se comprometió a reconocer a la trabajadora a título de bonificación ocasional de mera liberalidad no constitutiva de salario, las sumas de \$44.524.398,00 y \$1.969.398, un bono de salud por \$433.700,00 y un bono cartera de \$1.000.000,00; del referido documento no se evidencia nada diferente de lo que las partes acordaron en forma libre y voluntaria, esto es, la terminación del contrato de trabajo y el reconocimiento de las sumas de dinero descritas a título de bonificación, sin que del mismo se pueda advertir solicitud, insinuación, amenaza o pedimento alguno de la renuncia como se afirma por la parte demandante (...)"

(...) esta Sala de la Corte en sentencia del 20 de marzo de 2002 radicado 17080, ratificada en la de fecha 22 de junio de 2007 radicado 30239, puntualizó:

(...) Con todo, reitera la Corte que la circunstancia de que un acuerdo conciliatorio se plasme en un documento previamente impreso no afecta su validez ni constituye prueba de la existencia de un vicio en el consentimiento de las partes, en cuanto en él conste de manera inequívoca la expresión de voluntad de asentamiento del trabajador, la que, en este caso, como lo concluyó el Tribunal, debe suponerse con la existencia de su firma".

Como conclusión de lo aquí discurrido, tanto el contrato de transacción como la conciliación que formalizaron el acuerdo de voluntades celebrado entre la promotora del proceso y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., que se considera válido, eficaz y ajeno a cualquier vicio del consentimiento (...)"
(Subrayado fuera de texto).

Expuesto lo anterior, se puede concluir que está demostrada la validez y legalidad del acuerdo de transacción celebrado el día 20 de abril de 2017 entre PRODUCTOS FAMILIA S.A. y el señor FREDY MANTILLA RUIZ, ya que es un acuerdo que se ajusta a la Ley y fue suscrito de manera libre y voluntaria por el demandante, por lo tanto, no existe discusión alguna de la existencia de Cosa Juzgada.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer si en el presente proceso, el acuerdo de transacción que suscribieron las partes en litigio para terminar con el contrato de trabajo que los unió entre el año 2005 y el 2017, constituye o no, cosa juzgada frente a las pretensiones del presente proceso y en consecuencia si era procedente pronunciarse sobre la cosa juzgada derivada de dicha transacción como excepción previa, como afirma la recurrente, o si por el contrario debe resolverse de fondo en la sentencia tal y como lo dispuso la A quo.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre excepciones previas conforme al Art. 65 del CPT y de la SS, se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Según el alcance de la sustentación del recurso de apelación, corresponde dilucidar a esta superioridad si en el presente proceso, el acuerdo de transacción que suscribieron las partes en litigio para terminar con el contrato de trabajo que los unió entre el año 2005 y el 2017, constituye o no, cosa juzgada frente a las pretensiones del presente proceso y en consecuencia si era procedente pronunciarse sobre la cosa juzgada derivada de dicha transacción como excepción previa, como afirma la recurrente, o si por el contrario debe resolverse de fondo en la sentencia tal y como lo dispuso lo argumentó el *a quo* en la parte motiva de su decisión de la excepción previa.

En primer lugar debe referirse la Sala a la figura de la **transacción**, la cual ha sido definida por el ordenamiento colombiano en el artículo 2469 del Código Civil, como *“(…) un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”*.

Por otra parte, el inciso primero del artículo 32 del CPTSS, norma especial en los asuntos laborales y de la seguridad social, señala taxativamente los hechos que por regla general ostentan la calidad de excepciones de mérito o perentorias, y que además también podrán presentarse como previas con el fin de que se no desgaste la justicia en asuntos que desde el inicio pueden resolverse, y cuyo tenor es el siguiente:

“El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.

Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia.” (subrayas de la sala)

La finalidad de la Cosa Juzgada consiste en imprimir fuerza vinculante a las sentencias, pero también a las conciliaciones y transacciones legalmente celebradas

para proteger su carácter definitivo e inmutable, a fin de salvaguardar el orden social y la seguridad jurídica; de ahí que, de encontrarse configurados sus elementos sin discusión, ésta debe declararse como previa para que no debe decidirse como de fondo al resolverse las pretensiones planteadas en la demanda, lo que se colige como una función negativa, tal y como señaló la H. Corte Constitucional en sentencia C-100 de 2019, providencia en la cual manifestó que *“se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”*.

Conviene resaltar que, aunque el artículo 303 del CGP prevé la cosa juzgada para las sentencias ejecutoriadas, ello no impide aplicar sus requisitos al contrato de transacción para concluir que un contrato de transacción tiene fuerza de cosa juzgada frente a un proceso siempre que ese proceso verse sobre el mismo objeto de la transacción, se funde en la misma causa y entre la transacción y el proceso exista identidad jurídica de partes.

En Sentencia C-820 del 2011 la Corte Constitucional, al referirse, entre otras, sobre la excepción de cosa juzgada, indicó lo siguiente:

“En el caso de la cosa juzgada, la verificación se contrae a contrastar objetivamente el contenido de una decisión o actuación anterior que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada, a fin de establecer si las partes, el objeto y la causa presentan identidad con los mismos elementos del proceso actual, a fin de declarar la autoridad emanada de la existencia de dicho fenómeno. De modo que resulta razonable y compatible con el orden justo que promueve la Constitución, anticipar una decisión que protege a las partes de un nuevo juicio y una nueva sentencia sobre la misma materia, desplegando sobre la actuación actual las funciones positivas y negativas que se atribuyen al instituto de la cosa juzgada como son las de prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico. Pugnaría con el interés del Estado en promover la seguridad jurídica y la estabilidad de los derechos, el permitir que un proceso avanzara hasta su culminación, no obstante hallarse plenamente acreditada la estructuración del fenómeno de la prescripción liberatoria, o de la cosa juzgada.”

En concordancia con ello, el fortalecimiento de los poderes de dirección del juez consagrados en el **artículo 48 de la Ley 1149 de 2007**, representa una garantía para los sujetos procesales, en tanto el funcionario judicial en ejercicio de esta potestad, debe valorar si la excepción de cosa juzgada formulada por el demandando para que sea resuelta como previa, se encuentra clara y solventemente acreditada, de tal manera que resulte palmario que la continuación del proceso iría en desmedro de los

derechos de las partes a una pronta y cumplida justicia, y de la misma justicia a que no se le desgaste con asuntos que ya fueron objeto de arreglo legal entre las partes.

Encuentra la Sala entonces que en el presente caso, la demandada FAMILIA S.A. funda su excepción previa en que suscribió con el demandante un acuerdo transaccional, el cual se encuentra visible a folios 9 a 12 del documento 16 del expediente digital, acordando la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, con e reconocimiento de acreencias laborales, y de una bonificación por retiro que según se advierte de la liquidación que milita a folio 13 del documento 16 del expediente digital ascendió en total la suma de \$65.649.001; y en aras de prever cualquier litigio o diferencia, se consagró que dicho acuerdo constituía cosa juzgada y en consecuencia tenía validez y eficacia jurídica propia.

Pese a lo anterior, encuentra la Sala que, como fundamento de la demanda, insistentemente señala la parte actora, que, contrario a lo que quedó consagrado en el Acuerdo de Transacción, la terminación del contrato se dio por decisión unilateral de la demandada, y que fue apremiado por sus jefes directos para que el acuerdo quedara firmado ese 20 de abril de 2017 antes de las 12 meridiano, haciéndole suscribir de manera engañosa el referido documento de terminación laboral por mutuo acuerdo, ofreciéndole unas compensaciones que a la luz del derecho laboral no eran más que cortinas de humo para defraudarlo, disfrazando con ellas un despido sin justa causa, como si se tratara de una terminación por mutuo acuerdo.

Manifiesta además que sus jefes, más concretamente el jefe de personal y el departamento de psicología de la empresa, utilizaron métodos de persuasión poniéndole un ultimátum, al manifestarle que con mayor o menor dinero debía salir por cualquier causa de la compañía por motivos de restructuración y engañaron fraudulentamente sus intereses, pues no conocía los derechos a que estaba renunciando.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que, como bien lo concluyó la falladora de primer grado, el análisis del objeto del proceso, sobre los vicios que haya habido o no en el consentimiento del demandante al momento de suscribir el Acuerdo de transacción para la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo con la sociedad demandada, es un asunto que debe ser resuelto de fondo en la sentencia y no de manera preliminar como una excepción previa de cosa juzgada.

Lo anteriormente expuesto, llevaría en principio a confirmar la decisión del *a quo*, sin embargo, se encuentra la sala, que el juez incurre en una imprecisión o un error de técnica jurídica, pues adujo que el asunto de la cosa juzgada no se podía resolver como excepción previa, sino de fondo con la sentencia, sin embargo en la parte resolutive declaró no probada la excepción previa, cuando en realidad lo que tenía era que abstenerse de decidir la cosa juzgada como previa, al considerar que debía ser resuelta con la sentencia, pues de la forma como decidió en la parte resolutive, implica que tomó un decisión de fondo que impediría retomar nuevamente en la sentencia el asunto de la presencia o no de la cosa juzgada, por lo que se revocará la decisión del *a quo*, para en su lugar disponer que la excepción de cosa juzgada, propuesta como previa no se resuelve como tal sino que se decida con la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

REVOCAR el auto del 18 de agosto de 2022, dictado por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se declaró no probada la excepción previa de Cosa Juzgada propuesta por PRODUCTOS FAMILIA S.A. dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor FREDY MANTILLA RUIZ en contra de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., para en su lugar DECLARAR que la existencia o no de la cosa juzgada debe ser resuelta como excepción de mérito con la sentencia que ponga fin al proceso.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión.

Los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **195** del **28 DE OCTUBRE DE 2022**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3b36f7d8eb61e6c616274d7671196b245af578c8b4eeabdd57736026733d786a**

Documento generado en 27/10/2022 03:07:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>